

De pertinente lectura, de conveniente crítica

Joaquín Azagra

Sendos libros (*Un modelo social para Europa* y *Europa global, Europa social*) y un denominador común: Policy Network, el activo «think tank» patrocinado por Blair, Schröder, Amato y otros líderes socialdemócratas. Así ha iniciado su andadura la nueva colección que Publicacions de la Universitat de València dedica a la reflexión sobre el futuro de Europa. En ambos textos se recoge una selecta muestra de los debates impulsados por ese grupo de expertos que encabezados por Anthony Giddens, Patrick Diamond y Roger Liddle promueven el intercambio de ideas para el desarrollo de una política progresista desde la perspectiva del socialismo democrático. No es ocioso fijar la vinculación de estos escritos con las experiencias políticas –Tercera Vía, Agenda 2000, etc.– de mayor impacto que se registran en los últimos tiempos para situar las respuestas a los retos que el socialismo democrático tiene planteados, manteniendo los valores democráticos europeos.

Con mayor impacto digo, pero también con acerbas críticas, tanto que Alain Touraine definió la Tercera Vía con ironía rayana en el sarcasmo, como «un acierto publicitario», Lionel Jospin como «inútil» y el Nobel de Economía Gary S. Becker como «una vía de derechas». No faltaban motivos para criticar lo que entonces parecía un intento de síntesis no entre Estado y Mercado, que eso

había sido logro de la socialdemocracia, sino entre ésta y el afán conservador por empuqueñecer el Estado del Bienestar. Más aún, las sucesivas derrotas socialistas en tantos países europeos se adjudicaron en parte a tales cesiones al avance liberal. Pero hete aquí que la crisis económica ha situado en el centro de las políticas de todos los países la reducción del gasto público y en consecuencia, del tamaño del Estado.

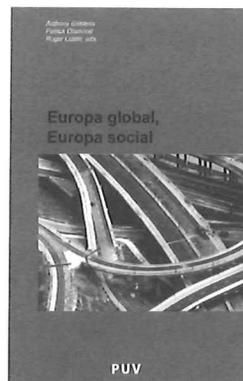
Porque la realidad es esa, la de una sociedad europea que sorprendida por la brusca interrupción del crecimiento, ha reaccionado más asustada que irritada y pese a que la crisis se ha gestado en un sector tan emblemático del capitalismo como es el financiero, ha preferido votar a quienes lo defienden antes que a quienes lo intentan regular. La socialdemocracia ha carecido de respuestas propias o al menos identificables como tales. De ahí la actualidad de estos libros, por otra parte bien cercanos en el tiempo pues sus primeras ediciones son de 2006. Pero la historia hoy corre más que transcurre. Por eso más allá de la crítica que suscitaron las publicaciones de los debates impulsados por Policy Network y aún más, las políticas del Nuevo Laborismo inglés o de la socialdemocracia alemana, la actual situación aconseja la lectura de unas propuestas que hoy se han convertido en agenda de lo que

el pensamiento progresista europeo debe resolver si quiere seguir siendo agente central en la construcción y gobernanza del futuro de Europa.

En los textos que se reseñan hay un apreciable consenso respecto a la necesidad de reformar el actual Estado del Bienestar y a las causas de dicha exigencia. Cau-



Patrick Diamond et al.
Un modelo social para Europa.
La agenda de Hampton Court
PUV, Valencia, 2008, 172 págs.



Anthony Giddens, Patrick
Diamond, Roger Liddle, eds.
Europa global, Europa social
PUV, Valencia, 2009, 414 págs.

sas externas derivadas del proceso de mundialización de las relaciones económicas, o sea de la globalización. Se considera que la competencia internacional –que en el caso de algunos países emergentes podría ser calificada de *dumping* social– altera las bases del crecimiento y del empleo al tiempo que cuestiona el alcance distributivo y el carácter desmercantilizador de los Estados del bienestar nacionales europeos, aún con las diferencias entre ellos. Y causas endógenas debidas a los cambios estructurales de estas sociedades postindustriales. Cambios entre los que se destacan el envejecimiento de la población con el consiguiente aumento del gasto en pensiones y en sanidad que ello supone; las variaciones en la estructura de las familias, derivadas del masivo acceso de la mujer al mercado laboral pero también de cambios culturales y que socavan las bases de unos sistemas de provisión de prestaciones y servicios de tipo familiarista; asimismo se destaca el impacto de la inmigración que cuestiona los mecanismos de inclusión social. Finalmente, un tercer grupo de causas afectaría al espacio institucional, a lo que se entiende como disfunciones y rigideces en el funcionamiento del Estado generadas muchas veces por la burocratización de un modelo proteccionista y en gran medida corporativista. La reforma y modernización del Estado resulta imprescindible para dotar a la maquinaria pública de la agilidad, modernidad y sostenibilidad necesarias para llevar adelante el diseño y ejecución de las nuevas políticas.

En resumen, el punto de partida se instala en la convicción de que el Modelo Social Europeo (pese a las diferencias entre los tres modelos de Esping-Andersen, ampliados a cuatro por Sapir y en la práctica a muchos más por las peculiaridades de cada caso nacional, es correcto hablar de un Modelo Social Europeo en el sentido en que lo acuñó Jacques Delors, como

la combinación entre crecimiento económico y cohesión social) es insostenible en un contexto económico previsible más allá de la actual crisis. Salvar lo que Giddens llama «la joya de la Corona» de la sociedad europea pasa por modernizarla vía reformas. Ahí se inscriben la totalidad de los trabajos que integran ambos volúmenes, todos ellos en la estela de la Estrategia de Lisboa con sus tres pilares: crecimiento económico y competitividad; cohesión social y compromiso ambiental.

En efecto, los artículos abordan una temática amplia siempre vinculada al aspecto central, cómo debe Europa enfrentar desde una óptica progresista los retos de su modelo social en el contexto de su modelo socioeconómico. Corresponde a Giddens plantear la visión de conjunto y al resto de autores abordar algunos temas singulares de la mayor trascendencia. Cuatro son los ámbitos en que pudiera articularse dicha temática. El primero y que quizás ocupe más espacio, el que se refiere a la prioridad que debiera darse a la formación y educación desde la doble perspectiva de dotar a la sociedad europea de un mayor capital humano que incremente su competitividad y potencie el empleo de calidad y el crecimiento económico, pero también desde la perspectiva de la superación de las desigualdades generando más igualdad de oportunidades. El segundo, los artículos que plantean las debilidades del mercado laboral en los que se apuesta con rotundidad a partir del ejemplo nórdico, por la *flexiseguridad* y el trabajo a tiempo parcial como mecanismos adecuados para evitar las rigideces de sistemas que frenan el crecimiento y la creación de empleo. El tercer ámbito es el referido a la inmigración que se piensa no sólo inevitable sino necesaria pero de la que no se ocultan los problemas que puede suponer y de hecho supone. Por ello no hay cantos a la multiculturalidad ni al integracionismo

acrítico. La inmigración demanda integración pero también regulación y control. El cuarto ámbito es el que intenta definir el perfil de un modelo alternativo de sistema de bienestar. El eje sobre el que giran las propuestas es el cambio de los sistemas universalistas y de prestaciones pasivas a otro más selectivo y de prestaciones activas. Claro que eso puede requerir que las prestaciones universales sean más contributivas, por ejemplo vía copago o retraso en la edad de jubilación. El principio sería el de dotar los ciudadanos de las capacidades necesarias para solucionar sus problemas por sí mismos para lograr lo cual la formación y las ayudas priorizadas a colectivos con riesgos –la niñez y la pobreza se repiten como ejemplos de prioridades– son esenciales y desburocratizar el Estado una condición necesaria. No basta con ajustar el sistema, hay que reformarlo en profundidad.

Ya he dicho que es Giddens quien se atreve a esbozar una propuesta global aunque quizás esté orillando lo que aportan los dos prólogos de Joan Romero que enriquecen la visión global y detallan las cuestiones abiertas por esta temática y las propuestas sobre las que existe mayor consenso entre los autores: el refuerzo del papel de la UE, el diseño de políticas activas de empleo que limiten la cultura del subsidio, la prioridad de la educación y la formación especialmente en las edades tempranas, la atención preferente a las nuevas formas de desigualdad y pobreza, el reajuste de los sistemas de pensiones con el alargamiento de la vida laboral, la atención a temas de seguridad de las personas y el orden público, la regulación de la inmigración, la revisión de los planes energéticos, el urbanismo sostenible, la mejora en la eficiencia del Estado vía una inteligente relación público-privado, etc. En resumen se trata de plantear propuestas positivas para lo que se ve como objetivo central, la reforma del modelo social europeo. Refor-

ma que no defensa. Es matriz importante pues se desprende del análisis que los riesgos del Estado del Bienestar no proceden sólo de quienes quieren minimizarlo desde posiciones neoliberales, sino también a veces desde posturas corporativas que autoconvertidas en defensoras del interés general pueden olvidar que hoy por hoy lo fundamental es construir sistemas que garanticen la cohesión social y la seguridad de las personas pero que sean viables y sostenibles. No basta con defender el modelo existente sino crear el del futuro inmediato. Reforma que no defensa propugnan los autores.

No estoy seguro de que con estos mimbres se pueda reconstruir un discurso de izquierdas o al menos, no sólo con ellos. Pero tampoco se trata de desecharlos. Que ésta ya no es la sociedad que alumbró el Estado del bienestar parece obvio. Difícilmente el proletariado industrial podrá nuclear mayorías de progreso en una sociedad con una economía posfordista y de servicios. Tampoco parece que sea fácil concitar el apoyo de sectores de unas clases medias tan segmentadas. Así que habrán de ser tenidas en cuenta todas las reflexiones serias pues es innegable que el modelo defendido por la socialdemocracia clásica corre el riesgo de convertirse en insostenible, que resulta gravoso y somete al modelo económico a presiones que limitan su capacidad competitiva. Más aún, que produce efectos perversos como la disminución de la responsabilidad ciudadana, la burocratización de la gestión de muchos servicios e incluso nuevas formas de desigualdad, por no hablar de la génesis de intereses corporativos que se niegan a reformas necesarias.

Todo eso es cierto, pero también lo es que una reforma concebida desde la perspectiva de la izquierda no puede poner el énfasis en la competitividad sino en la solidaridad. Quiero decir que precisamente porque, como señala Tony Judt,

para las jóvenes generaciones las reivindicaciones que fundamentaron ese sistema –la protección pública frente a la ignorancia, la enfermedad, la vejez, el desempleo y la pobreza– son condiciones normales de vida, se hallan muy arraigadas y su reforma encuentra resistencias entre sus beneficiarios. Y el Estado del bienestar es en definitiva un gran pacto social entre jóvenes y viejos, entre ocupados y parados, entre sanos y enfermos, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. Un pacto basado en el mutuo interés, articulado fiscalmente y sostenido por consensos sociales amplios.

Por eso el punto de partida no puede identificarse con la crítica que la derecha esgrime desde siempre. Con carácter atemporal y sin relacionar políticas sociales y cambios en la estructura social, pero con un corolario permanente: un sector público excesivo obliga a incrementar la presión fiscal y hurta capital al desarrollo por lo que es imprescindible recortar su gasto. Si se acepta la lógica del capital y se centran los objetivos reformistas en adelgazar el Estado para dotar de competitividad a la economía y generar crecimiento, se corren muchos riesgos. Uno, el de perder apoyo electoral y excluir a la izquierda reformista de los centros de poder político. Otro, que la búsqueda de un Estado más eficiente y barato derive en un Estado asistencial con unos servicios públicos limitados para pobres y con el grueso de las prestaciones de provisión privada. Y la mercantilización no promueve derechos sociales, más bien los limita.

Decía antes que en última instancia el Estado del bienestar supone un pacto entre quienes contribuyen más de lo que reciben y quienes reciben más de lo que están obligados a contribuir. Ello a cambio de estabilidad y progreso del que salen más beneficiados los primeros pues están mejor situados en el mercado. Bien, pues introducir reformas para que sea viable re-

quiere partir de los mecanismos de creación y distribución de la riqueza y de eso se habla poco –sólo en la prioridad de la educación para corregir desigualdades– en los programas de la Tercera Vía. Requiere también saber que el tamaño sí importa y el Estado es más redistribuidor si es más grande. Requiere en consecuencia relanzar la conveniencia social de una fiscalidad justa y con capacidad recaudatoria. Pero sobre todo, requiere asumir que una economía mundializada exige medidas globales: instrumentos de fiscalidad internacional, regulación de los mercados financieros, condiciones básicas en el trabajo, acuerdos migratorios y medioambientales de carácter supranacional... En definitiva no se trata de negarse a reformas que son imprescindibles y de las que estos libros dan cuenta. Se trata de que la izquierda no haga el trabajo de la derecha. Se trata de hacerlas conjuntamente vía consenso como por otra parte se construyó el Estado del bienestar. Porque una cosa es que la socialdemocracia se sienta orgullosa de su tarea y otra no reconocer que fue fruto de una tensión creativa en la que participaron liberales y democristianos. Por lo tanto, que cada cual cumpla con su trabajo, que la construcción del futuro no es cosa de un solo partido ni de una ideología.

Joaquín Azagra Ros es profesor de Historia Económica en la Facultad de Economía de la Universitat de València.